



crisis, guerra, violencia y extranjeros. Más allá del punto de retorno de la gobernabilidad en Colombia durante la década de 1980

Juan Diego Acevedo Álvarez¹

Juan David Alzate Medina²

¹ Historiador, aspirante a magíster en Historia y docente investigador. Correo: Juan.acevedo1@udea.edu.co

² Estudiante de pregrado en Historia y docente. Correo: juan.alzate1@udea.edu.co

En Colombia se ha utilizado el monopolio de la violencia como una de las estrategias para la construcción simbólica del poder. Esta condición política, social, cultural y económica se puede entrelazar en un abanico investigativo para comprender cómo se ha configurado la nación colombiana. El presente artículo analiza cómo los agentes extranjeros incidieron en la tecnificación de la violencia en Colombia durante la década de 1980.

Después de todo amamos discutimos leemos
aprendemos sueco catalán portugués
vemos documentales sobre el triunfo
en vietnam la libertad de angola
Fidel a quien la historia siempre absuelve
y en una esquina de carne y hueso
miramos cómo transcurre el mundo
escuchamos coros salvacioncitas y afónicos
contemplamos viajeros y laureles
aviones que escriben en el cielo
y tienen mala letra

Mario Benedetti

Introducción

El proceso político constitutivo de la formación del Estado en Occidente, es decir, el proceso mediante el cual se conforman los Estados modernos, según el concepto del Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional (ODECOFI), se caracteriza por cuatro etapas específicas: primero, la incesante lucha por el establecimiento de unas fronteras bien definidas hacia el exterior, que llevan a la integración de un territorio específico. Esta unificación del territorio provoca en algunos casos la destrucción de fronteras internas que, inexorablemente, desemboca en el fenómeno de integración territorial a través de redes hegemónicas establecidas entre el campo y la ciudad, que consolidan la creación del Estado como una figura de equilibrio entre la Iglesia, los reyes, los burgueses y el pueblo llano. La segunda etapa presenta una diversificación de grupos e individuos, producto de esta interacción de los Estados en formación realizan una integración social en la que el poder de turno, buscando apoyo en los nuevos sectores urbanos, limita la participación política y social de los competidores al poder; tal integración solo es posible a través de un muy bien estructurado aparato estatal que permita la participación de círculos de apoyo de los que se vale este poder; así, actores como senadores, cónsules, ministros, entre otros, se atornillan en sus puestos públicos con el objetivo de tomar decisiones que perduren e impacten de manera positiva sus intereses. La tercera etapa de la configuración estatal es la centralización de la política, la cual delimita la participación social y política del Estado. Por último, las etapas antes descritas van articuladas por medio de la construcción simbólica del poder, constituidas por todos los elementos materiales o abstractos de que se vale el poder estatal para mantener la subordinación entre los ciudadanos. Un ejemplo de lo anterior es el control hegemónico de la violencia por parte de un Estado que, mediante sus diversas instituciones militares o policiales, procura conservar el orden a través de la coacción ciudadana de manera simbólica o material (González, 2014).

Colombia, en su proceso de consolidación como Estado nación, no ha estado exenta de las etapas mencionadas, sin embargo, en el atribulado devenir histórico de la nación han existido crisis en las que se han vistos interrumpidos los procesos evolutivos de estas etapas, o que han trabajado inconexas entre sí, poniendo en duda la modernidad misma del Estado colombiano. En dichos momentos de crisis, en los que la gobernabilidad se ve en vilo, aparecen reiterativamente las imágenes de los extranjeros, unas veces como modelos inspiradores y otras, en la mayoría de los casos, como una imagen que por turbia y de difícil comprensión se convierte en el modelo negativo, la in-

fluencia que no se debe seguir, gracias a que, en ocasiones, impera el punto de vista militar o diplomático (Brown, 2004).

Ante la incesante inestabilidad política en Latinoamérica, y en particular las relaciones internacionales que afrontó Colombia en gobiernos posteriores, la hermana república de Venezuela apareció de forma constante en la tormenta mediática, como en el pasado 20 de diciembre del 2018, cuando el ciudadano Manuel Pino García, que, a pesar de llevar un poco menos de veinte años en el país y de haber estado involucrado en diferentes hechos dudosos ante la ley (durante su estadía en Colombia), fue expulsado bajo un gran cubrimiento periodístico, enfatizando que «la retención y posterior expulsión

se fundamentan en las normas que le dan a esa autoridad la potestad de tomar medidas frente a extranjeros que puedan representar una amenaza contra la seguridad nacional y la tranquilidad pública» («La expulsión de Pino», 2018). Es decir, se decretó que dicho ciudadano venezolano era una amenaza después de que el expresidente Iván Duque Márquez (2018-2022) insistió en el «cerco diplomático». Por lo anterior, es necesario entender esa imagen del extranjero en tiempos de crisis y violencia, leer estos hechos a la luz de la historia y crear elementos y herramientas con el análisis historiográfico que permitan comprender cómo la nación colombiana se ha articulado al sistema-mundo.

Teniendo en consideración lo anterior, el presente artículo analiza cómo los ciudadanos extranjeros incidieron en la tecnificación de la violencia en Colombia durante la década de los ochenta. Para abordar lo planteado, se tomaron como punto de partida los archivos de prensa de los periódicos *El Tiempo*, *El Espectador* y la revista *Semana*, con el fin de generar un contexto histórico a nivel local y nacional. Luego, se complementa lo identificado al contextualizarlo con la ayuda de bibliografía relacionada al tema, buscando articular los elementos de

...las condiciones de colonización campesina tardía, correspondientes a las décadas posteriores a los años cincuenta, en el sur del Meta, en el Caquetá, Guaviare y Vaupés, facilitaron que las organizaciones insurgentes ejercieran funciones estatales en las nuevas zonas de apertura de fronteras del país...

análisis sobre el flujo de inmigrantes, las redes de migración, las políticas y la participación en la violencia durante la década de 1980.

El porqué de esta época

Para nadie es un secreto que la atribulada política nacional, por un poco más de doscientos años, se ha enfrascado en una guerra fratricida que ha evolucionado a la par del devenir nacional. Así, racismos y marginalización, soterrados en un discurso lleno de eufemismos, parecen ser la receta básica en el menú de este devenir, empero, la década de 1980 recoge los diversos hechos nacionales e internacionales y los mezcla en una profunda crisis de gobernabilidad que, en última instancia, termina compeliendo al Estado a reformar la Constitución Política de 1886.

Es necesario considerar que las condiciones de colonización campesina tardía, correspondientes a las décadas posteriores a los años cincuenta, en el sur del Meta, en el Caquetá, Guaviare y Vaupés, facilitaron que las organizaciones insurgentes ejercieran funciones estatales en las nuevas zonas de apertura de fronteras del país, permitiendo cambiar las dinámicas sociales y económicas que agudizaron la confrontación armada en la zona rural, que creció paulatinamente con la zona urbana entre las décadas de 1960 y 1970 del siglo xx (Ávila, 2008). Paralelo a esto, a raíz de la incapacidad del Estado para controlar e intervenir socialmente estos lugares, la intensidad de la violencia en la época y la diversificación en los sectores económicos foráneos a la economía tradicional obligaron a reformar el aparato militar nacional. Un ejemplo de lo anterior fue el Decreto 3398 «Por el cual se organiza la defensa nacional», que permitió la creación de grupos alternos de ciudadanos colombianos para la defensa interna y externa, y la inclusión de los extranjeros en la administración pública y privada (República de Colombia, 1965, arts. 1 y 36). Lo anterior, legitimó la formación de autodefensas campesinas (algunas se convirtieron en las gestoras del paramilitarismo) y la génesis de movimientos insurgentes en Colombia como el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), entre otros.

Así, estos actores confluyen en nuestra década de análisis dividiéndola en dos: en la primera mitad imperan las noticias sobre el accionar insurgente, y en la segunda los titulares de la prensa nacional, colmados por los nacientes grupos de narcotráfico y de paramilitares que ponen a tambalear la gobernabilidad, debido a una serie de actos violentos, políticos, sociales y culturales.

Los insurgentes

El 27 de febrero de 1980, un grupo de insurgentes del Movimiento guerrillero 19 de abril (M-19), luego de seis meses de preparación, llevaron a cabo la operación «Democracia y libertad» («La epidemia de la toma de las embajadas», 1980, 11-A) mediante la cual se tomaron la embajada de República Dominicana. Luego de veinticuatro horas, este grupo guerrillero da un parte: catorce miembros de diferentes cuerpos diplomáticos retenidos en la sede de la embajada, entre los cuales se encuentran los embajadores de Estados Unidos, Egipto, Venezuela, Haití, Suiza, Austria, Brasil, Guatemala, México y Salvador, entre otros («Embajadores rehenes en Bogotá», 1980, 5-A). Luego, una lista de demandas, entre las cuales se incluyeron una publicación en la prensa de un material de dicha organización, cincuenta millones de dólares, la liberación de los presos políticos y el retiro total de las tropas civiles y militares que custodiaban la embajada.

Quizás este recuerdo esté fresco en la memoria del conflicto, dadas sus repercusiones y sonoridad dentro de la historia oficial, al que se le han hecho varios libros, una película y un gran número de reportes noticiosos. Hay que mencionar también que para la época, como acto simbólico contra las instituciones estatales, los grupos subversivos en Latinoamérica estaban tomándose las sedes diplomáticas, pues en ellas se discutían temas de seguridad del continente. No hay cómo demostrar ante la historia la conexión entre dichas acciones, a pesar de que manifiestan una articulación entre los movimientos insurgentes de diversas naciones; aun así, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos acusó al M-19 de trabajar de forma coordinada con grupos de montoneros argentinos y de tupamaros uruguayos («La epidemia de la toma de las embajadas», 1980).

José María de Areilza, exministro de Asuntos Exteriores en España y exembajador en Argentina, Estados Unidos y Francia, analizó, para la revista **Blanco y Negro** (Madrid), los ataques a las embajadas españolas en Guatemala, Salvador y Perú (hechos acaecidos en el mismo año, con menos de un mes de diferencia), y aclara que, desde su perspectiva, el accionar de los grupos insurgentes está atravesado por ciertas tendencias ligadas al uso estratégico en la lucha popular. Pese a que ejemplifica varias de estas modas, como el secuestro de aviones, deja un espacio de fuga en su discurso, asegurando que «es una enfermedad contagiosa que busca los símbolos visibles, persiguiendo un punto de apoyo para ejercer coacción» («El ataque a las embajadas es una epidemia: análisis de un experto diplomático y político español», 1980, p. 16). Así, el ataque directo a los símbolos de poder en los primeros meses de la década de 1980 es la clara imagen de lo que le esperaba a la nación.

El Estado colombiano, en una muy clara intención por prote-

Con estas bases se inició un proceso de colonización de tierras en la franja oriental del país (Meta, Caquetá, Guaviare y Vaupés), en el que las Farc-EP instaura un proceso de Estado dentro del Estado con renglones de participación en la economía internacional, base social, partido político y ejército para defenderlo.

vías de comunicación, acueductos y alcantarillados en las comunidades de la zona donde las petroleras y sus contratistas comenzaban a trabajar» («El ELN y los alemanes», 1990). Las exigencias anteriores se plantearon a cambio de no volver a atentar contra sus instalaciones o su personal. Es de reconocer el valor que hacen los años a los hechos, pues el secuestro de los ingenieros de la Mannesmann le dio tal impulso económico a esta organización que se llegó a decir:

No tenían límite en sus fronteras. Fue así como en mayo de 1988 secuestraron a dos cónsules alemanes, dos funcionarios suizos, un diplomático francés, una trabajadora social sueca y seis periodistas, incluyendo a dos corresponsales extranjeros. La ola de plagios hizo parte de una operación llamada Vida y soberanía «Manuel Gustavo Chacón», que tenía como premisa política la nacionalización del petróleo («El ELN y los alemanes», 1990).

Igualmente, entre 1975 y 1993, periodos que abarcan desde la quinta hasta la octava conferencia guerrillera por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (Farc-EP), se

ger los intereses económicos por encima del bienestar social y colectivo, contrata a dos empresas internacionales: la Mannesmann alemana y la Sicim de Italia para construir un oleoducto que permitiera comunicar los departamentos de Arauca y Sucre, conectando la zona del yacimiento con los puertos. Según la revista *Semana*, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se encontraba diezmado en su militancia y reducido en su fuerza, secuestró a cuatro ingenieros de la compañía alemana. Tras las negociaciones entre los insurgentes y el Gobierno alemán, (mediante la representación del espía Werner Mauss y su esposa), se llegó a un acuerdo, en el cual, no solo se incluyó dinero, sino que «el grupo guerrillero exigió invertirlo en obras sociales en materia de educación, salud,

redefinió el plan de acción de esta organización. El esquema básico de funcionamiento pasó de una estrategia de defensa a funcionar con un enfoque insurreccionalista, basado en los principios del marxismo-leninismo. Mediante el establecimiento de columnas móviles de campesinos, marginados y colonos, los insurgentes crean una base de apoyo, soportada por las relaciones de parentesco, vecindad o compadrazgo, elementos constitutivos de la seguridad del grupo.

Con estas bases se inició un proceso de colonización de tierras en la franja oriental del país (Meta, Caquetá, Guaviare y Vaupés), en el que las Farc-EP instaura un proceso de Estado dentro del Estado con renglones de participación en la economía internacional, base social, partido político y ejército para defenderlo. Se crea así, por parte de las Farc-EP, la Ley 001 de la reforma agraria, en la que se les garantiza la posesión de facto a los campesinos sin tierras, bajo la premisa de que «todas las propiedades o concesiones de compañías extranjeras, petroleras, mineras, bananeras, madereras, etc., quedan abolidas a partir de la sanción de la presente Ley y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo» (Farc-EP, 1982).

Así, las Farc-EP articularon la base social con la organización armada a través del Comité Nacional para la Reforma Agraria Revolucionaria (CONARAR) y del Comité para la Reforma Agraria Revolucionaria (CRAR), atribuyendo la defensa armada de la propiedad a los campesinos y a las comunidades indígenas. Esto es un ataque directo al sistema latifundista que soportaba la relación comercial agrícola del Estado con sus centros agrarios. Sin embargo, en este proceso de integración territorial y social, se presentó la necesidad de encontrar alternativas económicas para superar las barreras del aislamiento y la pobreza y centralizar el poder. En estas circunstancias, el comercio de la hoja de coca y el procesamiento y la producción de pasta base encuentran en este nicho las condiciones germinales idóneas, como se puede observar en el siguiente fragmento:

En la medida en la que crece el negocio del narcotráfico, igual sucede con los cultivos de coca, por esto, las Farc se ven obligadas a regular dicho mercado y a entrar en confrontación con los empresarios del narcotráfico, proceso que se inicia a finales de la década de los ochenta, pero se transforma significativamente a comienzos de los noventa con la muerte de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha (Martínez, 2008, p. 224).

Bajo las condiciones anteriores, el 6 de enero de 1987 se firmó la declaración conjunta de las Farc y el M-19 en búsqueda de un ataque contra el Estado, haciendo un llamado a todas las organizaciones insurgentes del país a unirse en torno a una Coordinadora Guerrillera

Nacional, instrumento de construcción simbólica del poder político que las guerrillas, con sus organizaciones territoriales de base, lograron en esta década (Farc-EP, 1987).

Paras y mafias, el lado opuesto

El accionar legalmente constituido de las autodefensas terminó por mutar en lo que se conoce hoy en día en Colombia como paramilitarismo. Este comenzó a mediados de 1970, coordinado por Ramón Isaza Arango, Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez), Arnubio Triana Mahecha (Botalón) y Luis Eduardo Cifuentes (El Águila). La primera estructura fue nombrada «Los Escopeteros», que empezaron a operar en 1977 y terminaron multiplicando sus frentes de batalla por Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Entre 1978 y hasta 1984, uno de sus propósitos era contrarrestar la insurgencia guerrillera, pero luego de esa fecha y al fusionarse con otra estructura ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, y al hacer alianzas con políticos, narcotraficantes y ganaderos como Carlos Loaiza, Luis Suárez y Gonzalo de Jesús Pérez, terminaron por coordinar acciones en conjunto, con oficiales del Batallón Bárbula del Ejército nacional colombiano, instaurado en Puerto Boyacá, con la finalidad de poder prolongar su expansión territorial, fortalecer su brazo armado y tener influencia en la política nacional. Adicionalmente, constituyeron la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (acdegan) el 22 de febrero de 1978, que funcionó como fachada para el lavado de divisas (Durán, 2013).

Para ejemplificar, en alguna medida, la preponderancia de los extranjeros en la crisis de violencia y de gobernabilidad nacional, se expondrán algunos de los casos en los que la influencia de estos tuvo acción directa o indirecta en las organizaciones de paramilitares y narcotraficantes. Así, la influencia extranjera en estos grupos se debe analizar en paralelo, ya que concatenaron un eje de fuerzas y una alianza que dio origen, en 1984, a las llamadas escuelas de formación y sicariato, que permitieron que las organizaciones delictivas configuraran su accionar armado y sangriento en la nación colombiana, debido a la red migratoria y económica que se tejió a manos de los mercenarios israelíes como Yair Klein, Melkin Ferry, Izahack Shoshani Meraiot, Avraam Tzedaka y Arik Piccioto Afek, que terminaron por entrenar y formar hombres con instrucción bélica en Colombia, no solo para la autodefensa, sino para impartir terror en la población civil y acrecentar el conflicto armado interno en la nación colombiana. De este modo, la red para la cual trabajaba Klein ayudó a la fundación de las famosas escuelas de la muerte, como, por ejemplo:

Cero Uno, El Cincuenta, El Tecal, La Corcovada y Galaxias. A estos

cursos asistieron Alonso de Jesús Baquero, alias El Negro Vladimir, y un sujeto conocido como Jaime Rueda Rocha, el mismo que cinco años después, un 18 de agosto, asesinó al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento (Durán, 2013).

Estas escuelas al servicio de la violencia hicieron mella en el devenir social, cultural y político colombiano, debido a que sus estudiantes más prodigiosos, como por ejemplo Alfredo Baquero, conocido como el Negro Vladimir, terminaron por perpetuar magnicidios y masacres, como el asesinato del exministro de defensa Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984, y luego de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán Sarmiento, perteneciente al Partido Liberal, abanderado de las ideas del Nuevo Liberalismo, y el excomandante del desmovilizado grupo guerrillero M-19 Carlos Pizarro Leongómez, un 26 de abril de 1990; situación que, en cierta medida, expone la crisis de gobernabilidad que afrontaba la nación colombiana para la época («Los perros de la guerra», 1989).

Así, la pedagogía impartida por estas escuelas se incrustó en el imaginario de muchos jóvenes de la ciudad, que vieron y ven en el sicariato no solo la salida a los problemas económicos, sino también la posibilidad de alcanzar un estatus social a sangre y fuego.

El mexicano financió estas escuelas. La más conocida, la Isla de la Fantasía. De allí salieron los Macetos, los Tiznados, los Grillos y Maicopa, grupos sicariales que atendían órdenes del Cartel de Medellín y los «paras» de Henry Pérez. Su primera misión consistía en atacar el campamento madre de las Farc, denominado Casa Verde. Según el documento de la Fiscalía, Pablo Escobar creó otra escuela de sicarios paralela, liderada por el instructor israelí Isaac Guttman Estembergef, asesinado en Medellín en agosto de 1986. De allí salieron los grupos los Pricos y los Quesitos (Durán, 2013).

Con la configuración de las escuelas sicariales después de 1985, el conflicto interno en Colombia sufrió una mutación en las dicotomías urbanas que persisten en la actualidad. Es decir, al fortalecer este accionar delictivo se permitió que se incorporaran nuevas armas y formas de actuar en la guerra interna. Un ejemplo, por no mencionar las variadas formas de violencia, guerra y destrucción de estos grupos, fue y es la motocicleta de alto cilindraje, que se articuló como una de las mejores herramientas en combinación con las armas de fuego y los atentados con carros bomba para perpetuar los crímenes e incrementar el proceso delictivo contra las instituciones del Estado, ajustes de cuentas entre una y otra organización y la eliminación de detractores de la política tradicional y no tradicional colombiana. Con la instrucción militar impartida por los mercenarios israelíes, los paramilitares multiplicaron y extendieron su capacidad de guerra en

La configuración de redes migratorias económicas, y más específicamente las focalizadas en el arte de la guerra, no solo se terminaron por el entrenamiento militar, sino por proveer de armamento bélico a las organizaciones y los grupos ilegales...

ciertos territorios, tanto rurales como urbanos, con el pretexto de combatir la subversión.

La expansión paramilitar por ciertas regiones del país, más que combatir la subversión guerrillera propició, primero, un aumento en las masacres, las desapariciones y los desplazamientos forzosos de la población; segundo, terminaron por actuar de manera articulada con algunos sectores de las Fuerzas Militares y servidores públicos, que son los actores directos en la actualidad del devenir político y económico nacional. Lo anterior, terminó por agudizar la crisis social y

acrecentar el fenómeno de violencia interna en la nación, el cual no ha permitido que el Estado colombiano consolide sus instituciones y logre distanciarse de la connotación de ser un Estado en permanente crisis interna. Aunque todo esto ha sido perpetrado por nacionales, no cabe duda de que las técnicas y la forma de operar enseñadas por esta red de extranjeros son un claro ejemplo de cómo los agentes externos ayudaron a fragmentar la crisis de gobernabilidad colombiana, bajo la configuración del arte bélico y la construcción de imaginarios colectivos de guerra, que terminan por identificar al otro (pobladores con posturas políticas, culturales y sociales contrarias) como enemigo directo.

De un complot organizado y ejecutado por mercenarios ingleses para matar a Pablo Escobar Gaviria. Según fuentes militares, al parecer estos hombres vinieron con la intención de trabajar para el cartel de Medellín, pero una mejor oferta los llevó a trabajar para el cartel de Cali en esa operación. Peter McAleese, Dave Tomkins, Alex Lennox, Geffrey Adams, entre otros, formaron hace algún tiempo un grupo que se conoce como «Los Intocables», y que vende sus servicios al mejor postor, que para su operación en Colombia se autodenominó «Los Doce del Patíbulo» (Durán, 2013).

La configuración de redes migratorias económicas, y más específicamente las focalizadas en el arte de la guerra, no solo se terminaron por el entrenamiento militar, sino por proveer de armamento bélico a las organizaciones y los grupos ilegales, con el objetivo de

perpetuar su accionar, creando así un negocio armamentístico y una tecnificación de las acciones bélicas, como es el caso del arsenal incautado al narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha.

El servicio aduanero estadounidense investiga rumores de que una red criminal israelí, que actúa en las afueras de Miami, armó y entrenó a los más despiadados traficantes colombianos en cocaína. Se pretende que esa red tramó el embarque del gobierno israelí, en abril de 1989, de quinientas armas automáticas, a través de la nación caribeña de Antigua y Barbuda, con destino a uno de los jefes del Cartel de Medellín, José Gonzalo Rodríguez Gacha. Una de esas armas se utilizó en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán (Leen, 1990).

Dos declaraciones juramentadas aparecieron en un intervalo de dos semanas con la firma en ellas de Klein [...]. En ella, Klein se responsabiliza plenamente por el pedido de armas y la remisión a Antigua. Cuando se desistió de la escuela de Antigua, dijo, hizo transferir las armas a nuestra otra escuela, que funcionaba en Colombia (Guarin, 1990).

La figura del extranjero y su participación en la violencia colombiana durante 1980 fue una de las intervenciones más fundamentales en el momento de la construcción simbólica del poder, y de la que se valieron los actores ilegales para mantener la subordinación entre los ciudadanos. Así, el control hegemónico de la violencia por parte del Estado se ha dado mediante diversas instituciones oficiales o, en algunos momentos, por grupos ilegales, los cuales controlan coercitivamente la ciudadanía de manera simbólica, violenta y material.

Conclusiones

En la construcción del ejemplo anterior, pese a que se enfoca en el desarrollo histórico de los acontecimientos y se trabaja en paralelo la historia de grupos de izquierda y derecha, hay ciertos factores importantes que se deben resaltar: 1) es inminente la articulación del Estado en las dinámicas del sistema-mundo; pese a que las condiciones de comunicación eran más adversas a las actuales, existe una articulación de acciones en las naciones que va más allá del panorama legalmente constituido, ejemplificado en este texto con la toma de embajadas. En dicho ejemplo, la prensa juega un papel importante en la construcción simbólica del conflicto. La participación de extranjeros en los actos insurreccionales es cubierta con la bruma de la especulación; todo parece estar envuelto en una trama de la que probablemente no se tenga ninguna certeza, pero que igual se esgrime en público sin reparo alguno. El término espía parece un péndulo oscilante; son

expulsados y perseguidos determinados ciudadanos extranjeros bajo este calificativo, y otros, con los mismos títulos, son invitados de honor para las instituciones oficiales y los organismos de consulta ante las adversidades políticas. La imagen de los extranjeros en el conflicto no parece responder a una connotación positiva o negativa, sino que articula diversas prácticas en lo microsocioal en medio de una interacción más macro. De esta forma, cada que se haga una valoración sobre el papel de los extranjeros en el devenir nacional se deberá ser imperante, extraer la esencia de las relaciones entre naciones, tratar de comprender el interés que articula los Estados en el momento del análisis, y buscar los elementos comunes que unen a los individuos.

2) Bajo la mirada histórica de los diferentes archivos de prensa nacional, se puede evidenciar que el papel que jugó la influencia extranjera en la crisis de violencia y de gobernabilidad nacional, la construcción simbólica del poder y el recrudescimiento del conflicto interno colombiano durante la década de 1980, fue preponderante en ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos en la nación.

3) Los extranjeros al servicio de la guerra que arribaron a Colombia, sirvieron para que se tecnificaran los grupos insurrectos, los paramilitares, las escuelas sicariales y las organizaciones de narcotraficantes que pusieron al Estado nacional en un punto coyuntural de inestabilidad social y política. Así, la cultura mercenaria y violenta de países que permanentemente han estado en guerras, como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, Israel y Rusia, lograron transformar el imaginario colectivo de las diversas capas sociales colombianas, demostrando nuevas dinámicas de violencia que terminaron por configurar y reconocer al «otro» como un enemigo, al cual debían eliminar sin mediar palabra o tener algún acto de conciliación política, como fue el genocidio del cual fue víctima el partido político de izquierda colombiano Unión Patriótica (UP), y hoy en día, el asesinato de líderes sociales que exponen una vez más que el nefasto conflicto armado que ha desangrado al pueblo colombiano no ha cesado en ningún momento.

Referencias bibliográficas

- Ávila, A. (2008a). El campesino-colono cocalero como base social de las Farc. En C. Medina (Ed.), *Farc-ep. Temas y problemas 1958-2008* (pp. 220-227). Universidad Nacional de Colombia. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/FARC_EP_Temas_y_problemas_nacionales.pdf.
- Ávila, A. (2008b). Farc: la coca y el narcotráfico. En C. Medina (Ed.), *Farc-ep. Temas y problemas 1958-2008* (pp. 216-217). Universidad Nacional de Colombia. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/FARC_EP_Temas_y_problemas_nacionalespdf.
- Benedetti, M. (1995). *Inventario: poesía completa, 1950-1985*. Editorial Su-

ramericana.

Brown, M. (2004). Esclavitud, casta y extranjeros en las guerras de independencia de Colombia. *Historia y Sociedad*, (10), 109-125.

Difícil acceso al nuevo pozo petrolífero (15 de julio de 1983). *El Tiempo*.

Durán, D. (27 de julio de 2013). Así fue la génesis del paramilitarismo. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-fue-genesis-del-paramilitarismo-articulo-436386>.

El ataque a las embajadas es una epidemia: análisis de un experto diplomático y político español (13 de febrero de 1980). *Blanco y Negro*. <https://www.abc.es/archivo/periodicos/blanco-negro-19800213-16.html>.

El ELN y los alemanes (11 de julio de 1999). *Semana*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-eln-los-alemanes/39855-3/>.

Embajadores rehenes en Bogotá (28 de febrero de 1980). *El Espectador*.

Extranjeros en el asalto (2 de febrero de 1980). *El Espectador*.

Farc-EP (1982). Ley 001 de la Reforma Agraria Revolucionaria. CEDEMA. <http://cedema.org/ver.php?id=5627>.

Farc-EP (6 de enero de 1987). Declaración conjunta Farc-EP y M19. CEDEMA. <http://cedema.org/ver.php?id=5373>.

González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. CINEP-ODECOFI.

Guarin, L. (3 de diciembre de 1990). Anatomía de las actividades del coronel Klein en América II escándalo de las armas. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-28424>.

La epidemia de la toma de las embajadas (29 de febrero de 1980). *El Espectador*.

La expulsión de Pino (20 de diciembre de 2018). *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/la-expulsion-de-pino-editorial-el-tiempo-307700>.

Leen, J. (2 de diciembre de 1990). Anatomía del escándalo Klein. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-27927>.

Los perros de la guerra. *Semana* revela todo lo que se sabe sobre el escándalo de los mercenarios ingleses e israelíes (10 de febrero de 1989). *Semana*. <https://www.semana.com/especiales/articulo/los-perros-de-la-guerra/12302-3>.

República de Colombia (24 de diciembre de 1965). Decreto Legislativo 3398 de 1965. Por el cual se organiza la defensa nacional. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66354>.